

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 21° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-9288-2021
CARATULADO : RAMÍREZ/ESTADO-CDE

Santiago, cinco de Julio de dos mil veintitrés

VISTOS:

Comparece don Boris Paredes Bustos, abogado, domiciliado en pasaje Doctor Sótero del Río N°326, oficina N°707, comuna de Santiago, en representación de don **MISAELE SEGUNDO RAMÍREZ MIRANDA**, cédula de identidad número 3.309.454-K, jubilado, domiciliado en Las Parcelas N°10.390, Villa Los Pensamientos, La Granja, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, abogado, ambos domiciliados en Santiago, Agustinas 1225, Piso 4°, comuna de Santiago.

Funda su demanda en que los hechos que describe a continuación, han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Manifiesta que don MISAELE SEGUNDO RAMÍREZ MIRANDA, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech 1, N°19.949, nacido con fecha 08 de diciembre de 1939, de actuales 81 años de edad, a la fecha de ocurrencia de los hechos era miembro del Comité Regional del Partido Comunista de Chile.

El letrado transcribe un extenso relato de su representado, el cual señala que fue electo regidor de la comuna de Las Cabras, VI Región, en el año 1967, por el Partido Comunista de Chile, y designado alcalde por mayoría de los regidores de la comuna. Luego, en el año 1971 es reelecto regidor, y de acuerdo con el pacto electoral con los partidos Demócrata



Foja: 1

Cristiano y Partido Radical, asume como Alcalde nuevamente poco tiempo antes del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. En el año 1971 ingresó a la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), en el cargo de Jefe de Área Peumo, que correspondía a las comunas de San Vicente de Tagua Tagua, Pichidegua, Peumo y Las Cabras, siendo su rol el de realizar estudios para futuras expropiaciones de las haciendas y fundos que existían en la zona. Agrega que a propósito de su ingreso al CORA, sufrió encerronas por parte de un grupo de latifundistas, en la comuna de Las Cabras, como acción de amedrentamiento.

Menciona que en la madrugada del día 11 de septiembre de 1973 se encontraba en su domicilio en la comuna de Las Cabras, donde fue informado que en Valparaíso había “una especie de golpe de estado”, lo que finalmente fue cobrando realidad alrededor de las 8 de la mañana. En ese momento, movilizó recorriendo la comuna, informando a los asentamientos cómo podrían organizarse y mantenerse firmes, pero en ningún caso enfrentar, puesto que no tenían con qué hacerlo. El mismo día 11 de septiembre, por las radios locales, regionales y nacionales se realizaron los llamados “bandos militares” en los que se instaba a determinadas personas a “presentarse voluntariamente en la Tenencia o Regimiento que corresponda” nombrándose un sinnúmero de dirigentes entre los que él también era citado. El no presentarse implicaba ser ejecutados en cualquier lugar. En esos bandos se señalaba que todos los dirigentes eran personas peligrosas y que estaban armadas, cuestión que no era cierta. También se señalaba que quien prestase algún tipo de ayuda o amparo sería detenido y puesto a disposición de las fuerzas armadas. Estando en conocimiento de que lo buscaban, ese mismo día 11 de septiembre de 1973 escapó hacia los cerros de la comuna de Las Cabras, en donde permaneció escondido varios días. Luego, por el mismo cerro bajó hasta Idahue, localidad de la comuna de Doñihue, llegando a la casa de un amigo que lo cobijó durante algunos días. Desde allí se trasladó a Rancagua y pasando cerca de la cárcel de la ciudad se encontró con compañeros del Partido y de otras colectividades, quienes le informaron que su padre Alberto Ramírez Suárez, su hermano Hernán Ramírez Miranda, su comadre Luz Aliaga, quién vivía en su casa junto a su hijo Wladimir Poblete Aliaga de 7 años, y Camilo Soto Osorio de



Foja: 1

15 años, que se quedaba en su casa los días de semana porque estaba en el Liceo de Las Cabras y su familia vivía en el sector de Quilicura a 12 Kms del centro de la comuna, todos habían sido detenidos con el fin de encontrarlo a él. También detuvieron a todos los compañeros que de la zona de Quilicura, entre ellos varios niños y niñas, hombres y mujeres, todo quienes fueron torturados, bajo exigencia de informar sobre su paradero para ser liberados. Agrega que su padre y hermano fueron brutalmente torturados, al igual que su comadre Luz Aliaga, a quien incluso le raparon el cabello y la pasearon por la comuna como muestra de burla, cosa que también hicieron con algunos niños que trajeron de Quilicura: les cortaron el pelo con tijeras de podar, quitándoles no sólo pelo, lo cual ya era terrible, sino que también cuero cabelludo. Detalla que su casa fue allanada en múltiples oportunidades, llevándose máquinas de escribir, joyas de su madre fallecida, dineros y mercaderías del negocio de sus padres, y lo que no se llevaron, lo destrozaron, como colchones, muebles antiguos con vidrio biselado, y en el patio rompieron toda la tierra buscando armas. Desde Rancagua se trasladó a Santiago en un taxi colectivo, y llegando a Santiago, tomó un transporte para dirigirse a la casa de un amigo en la plaza Chacabuco, y al pasar por la pérgola de las flores, se encuentra con el cortejo fúnebre de Pablo Neruda, por lo que decide bajar, y acompañar el cortejo hasta el cementerio.

Luego, llegó a la casa de una familia amiga, donde lo ayudaron, a pesar de ser buscado por la policía, permaneciendo allí varias semanas, hasta que la mañana del día 03 de noviembre de 1973, alrededor de las 7 am, llegó un destacamento de carabineros y lo detuvieron. Fue trasladado a una comisaría cercana a la plaza Chacabuco. Posteriormente, supo que también detuvieron a una de las personas que lo acogió en esa casa y que fue trasladado a Tejas Verdes. Ese mismo día, alrededor de las 20 horas, llegó un destacamento de carabineros provenientes de la comisaría de Peumo, Sexta Región, encabezado por el capitán Carlos Vargas Lama, el teniente César Manríquez, el sargento José Rojas, el cabo Zamorano y unos militares que ignora sus nombres. Varias de estas personas eran conocidas para él ya que eran carabineros de la zona en donde vivía, incluso, uno de ellos era su vecino. Esa misma noche, lo trasladaron a Las Cabras, y al salir



Foja: 1

de la comisaría no le entregaron los documentos ni el dinero que portaba. Estando en la ruta hacia Las Cabras, en el camino hacia Peumo por la ruta de Doñihue, se detuvo el vehículo que lo trasladaba, y lo llevaron hacia el cerro donde lo torturaron salvajemente, lo golpearon con pies y manos, golpes de metralletas, cuando se caía lo paraban entre dos y otros lo golpeaban, intentaron hacer la ley de fuga (que corriera contando hasta diez, haciendo un simulacro de fusilamiento). En ese momento, tomó a una de las personas por el cuello y lo puso contra su espalda para tratar de defenderse, pero entre varios logran reducirlo, ante lo que los golpes fueron más duros y fuertes, torturándolo brutalmente. Se orinó y sangró por todos lados especialmente en la cabeza, no sabe cuánto tiempo estuvo en esa situación, y sólo se detuvo la sesión de tortura cuando las personas de las casas aledañas comenzaron a salir y encender las luces debido a sus gritos de dolor. Lo amarraron de nuevo de pies y manos y como un bulto lo echaron arriba de la camioneta que era fiscal y de la Municipalidad de Las Cabras, la cual reconoció. Llegando a la comisaría de Peumo estuvo aproximadamente 8 días encerrado en una celda, sin comida, sin agua y con torturas a toda hora. En este lugar, lo colgaron de los brazos a una altura de 3 metros del suelo, y lo balanceaban golpeándolo con un palo de 2 x 2, le aplicaban corriente en su cuerpo en especial en la boca, genitales axilas y cabeza, y le daban golpes por todos lados del cuerpo. Estas eran sesiones de dos a tres veces al día, en especial en las noches porque no lo dejaban dormir, solo descansaban cuando se desvanecía de dolor o si llegaban con otros detenidos. Estas sesiones de tortura eran realizadas por el capitán Vargas, el teniente Manríquez, el sargento Rojas y otras personas. Los Carabineros eran todos de la zona, no así los militares que no conocía. Durante los días siguientes a su detención, fueron puestos en libertad su padre, hermano y cientos de personas de los asentamientos y vecinos de la comuna que se reconocían de izquierda y que habían sido detenidas mientras lo buscaban. Su padre tenía 73 años para ese entonces.

Producto de las torturas, y en particular, haberlo mantenido colgado por tantos días, sus axilas estaban degolladas, trataba de poner pedazos de su propia ropa para tratar que cicatrizaran las profundas heridas que tenía. Le aplicaban corriente, lo golpeaban, perdió gran parte de su dentadura,



Foja: 1

tuvo desprendimiento de retina de un ojo, lo que con el tiempo lo hizo perder la visión definitivamente del ojo derecho. Tuvo fracturas en diversas partes del cuerpo, los dedos de las manos las evidencian, así también se le recogieron los tendones de las manos.

En todos los interrogatorios decían que ellos sabían que él era el jefe del plan Z, le insistían en saber dónde estaba el armamento. Así, bajaron la cota del lago Rapel (lo secaron) buscando armas que según ellos él tenía allí. En los asentamientos de Quilicura buscaron armas dentro de las plantaciones de naranjas de diversos árboles, por todos lados. En su casa, así como de amigos buscaron en todos los lugares posibles, rompiendo todo a su paso, nunca encontraron nada. No tranquilos con eso, hicieron una lista con todas las personas que podrían estar en el Plan Z junto a él, incluyeron al cura párroco, directores de escuelas, eran alrededor de 20 o 30 personas que fueron citados a la fiscalía.

Desde Peumo fue trasladado en calidad de detenido a la fiscalía de Rancagua que funcionaba en la Intendencia de la misma ciudad, allí fue nuevamente torturado. Acá las torturas eran mucho más fuertes: la aplicación de corriente en tinas de baño de la Intendencia estaba a cargo del teniente Medina, el capitán Andriotti del Regimiento Lautaro de la época, los detectives Fagalde y Acevedo, que era el jefe de la policía política, un tipo grosero y salvaje con los prisioneros con un trato súper humillante, por cuanto, trataba de quebrar la moral del prisionero. Lo desnudaban y le pisaban los pies y manos, dándole golpes en los genitales y siempre burlándose de él.

Cada vez que terminaban las sesiones de torturas su condición física era muy mala, llevaba muchos días en condiciones inhumanas, sin alimentación, sin agua, siendo constantemente golpeado. Orinaba sangre y no podía mantenerse en pie, y a pesar de toda esta situación, las torturas continuaban. Después de muchas horas de torturas al anochecer lo trasladaron a la Cárcel de Rancagua dejándolo incomunicado. Al día siguiente, nuevamente es llevado a la fiscalía para ser torturado, donde pasa un sacerdote y siente los gritos de las torturas. Este sacerdote era el obispo diocesano de Rancagua y encomienda al capellán del ejército que realice una visita. Cuando éste realiza la visita puede constatar su estado, no lo



Foja: 1

reconoce puesto que su cuerpo está completamente negro debido a las torturas. Producto de esa situación, desde la Iglesia se levanta una queja al Intendente que era el comandante del ejército Lautaro. Posteriormente, le indicaron que sería llevado a un consejo de guerra por todas las acusaciones en su contra, momento en que un cura le mencionó que ellos serían testigos si se realizaba un consejo de guerra, consejo que nunca se llevó a cabo debido a que la comitiva a cargo de la caravana de la muerte no pudo aterrizar en Rancagua por mal tiempo.

Asevera que fue ingresado a la cárcel de Rancagua con fecha 20 de noviembre de 1973, en el sector de presos políticos conformado por alrededor de mil personas, lugar donde se realizaban operativos con fuerzas especiales y allanamientos, siendo permanentemente amenazados y amedrentados. Añade que el 18 de octubre de 1974, después de ser llamado para encontrarse con el intendente de la región, fue liberado bajo el pago de una fianza en la fiscalía, y de presentarse a firmar mensualmente. Sin embargo, posteriormente se percataron que fue liberado por error, y comienzan a buscarlo para detenerlo nuevamente. Así desde de Rancagua arrancó a San Vicente y finalmente a Santiago donde estuvo viviendo en la clandestinidad por muchos años.

Menciona que desde la detención sufre pesadillas, dando gritos guturales, gritos que según su familia no son de humanos, pero al despertarlo no recuerda qué sueño es, por lo que por muchos años estuvo consumiendo diazepam para dormir. Las secuelas han sido físicas y psíquicas. En lo físico perdió su dentadura, más del 50% de la visión, recogimiento de sus dedos, fuerte dolores de hombros y piernas.

Describe que mientras estuvo clandestino, su padre fue detenido varias veces, y producto de las torturas sufridas se enfermó y sufrió una falla renal, siendo hospitalizado en el hospital de Rancagua, lugar donde falleció el 4 de septiembre de 1976, no pudiendo acudir a sus funerales ya que sabía que ahí podían detenerlo nuevamente.

Concluye su relato señalando que estando en Santiago, se unió a la organización clandestina del Partido, viviendo en un lugar y otro, moviéndonos entre distintas comunas de Santiago. Así, su vida y como la de muchas personas, se vio truncada por el golpe militar, sufriendo muchos



Foja: 1

padecimientos, pero además, le quitaron sus planes de vida, su desarrollo personal, familiar y profesional. Su vida cambió para siempre, tuvo que dedicarse el resto de sus años a trabajos informales, ya que vivió en la clandestinidad, si bien logró formar una familia, siempre el peso de los sufrimientos personales y de todo su círculo han marcado cada día de su existencia.

A continuación, el apoderado del demandante expresa que el relato de su representado es claro y contundente: producto de la detención ilegal, torturas, prisión política y el hecho de tener que vivir en la clandestinidad, además del evidente e indescriptible dolor físico sufrido y la angustia, don Misael quedó con un temor permanente de ser nuevamente detenido y flagelado, que se mantiene hasta el día de hoy. Su proyecto de vida se vio completamente modificado y alterado, padeciendo de crisis de angustia, ansiedad, insomnio, depresión, todo lo cual revela que don Misael padece hasta el día de hoy las consecuencias de un trastorno de estrés post traumático de carácter crónico, de muy difícil recuperación atendida la profundidad del daño que le fue ocasionado por los agentes del Estado.

En lo concerniente al daño producido, señala que la detención ilegal y torturas descritas, se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, físico y moral incommensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial, además de un perjuicio material evidente. Así los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues aunque hayan transcurrido más de treinta años de lo sucedido, su representado continúa con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fue sometido.

Seguidamente, cita una parte de lo expuesto por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, sobre los efectos de la tortura y cómo la violación de los derechos de las personas les causó daños emocionales, morales y materiales, y que precisamente estos daños son lo que pide sean indemnizados. Precisa que el daño moral trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas, señalando que la jurisprudencia ha dicho que el daño moral “*es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia*



Foja: 1

naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho afecta la integridad física o moral de un individuo... ”. En el mismo sentido reproduce lo razonado por la Corte Suprema, en causa Rol 5964-2009, sobre el daño moral y el derecho a ser indemnizado.

Por todo ello, demanda en representación del demandante al Fisco de Chile, por daño moral como consecuencia directa de la detención ilegal y torturas de que fue objeto, el pago de doscientos millones de pesos (\$200.000.000), para el demandante, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto, el monto indemnizatorio que estime el tribunal, de conformidad con su apreciación y valorización del daño.

En el acápite del derecho, sostiene que de los hechos delictivos narrados precedentemente, es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que quienes los perpetraron eran agentes del Ejército de Chile, de Carabineros de Chile y de Gendarmería y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o civiles adscritos a las mismas, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública, haciendo presente que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Informe Valech”, siendo reconocido su representado como víctima de prisión política y tortura.

Refiere que la responsabilidad del Estado, emana del derecho administrativo en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano cometiendo actos ilícitos que causaron daño a las personas, específicamente de la Constitución Política de 1925, de la Constitución Política de 1980 y del Derecho Internacional.

Expresa que la responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales números 2 y 3 y, en la actualidad, en la Constitución de



Foja: 1

1980, reconoce claros antecedentes en la Constitución Política de 1925, vigente a la época de los actos ilícitos.

Agrega que la doctrina iuspublicista ha sostenido que existe un principio general de derecho administrativo, que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, con fundamento en el artículo 10 N°1 de la Constitución de 1925, y que los otros preceptos que sustentan el principio general de responsabilidad del Estado, a la luz de la Constitución de 1925, son los artículos 4, 10 N°1 y 10 N°9.

Menciona en el rubro de imprescriptibilidad de la acción, que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones, por las cuales se ha producido daño a personas que no se encuentran sujetas a sufrir el gravamen de soportarlos, por atentar a la igual repartición de las cargas públicas, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, es imprescriptible. La responsabilidad del Estado es un problema de derecho público y al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título XXXV del Código Civil, citando para tal efecto la opinión del profesor Eduardo Soto Kloss y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, la cual reproduce.

Agrega que por ende, las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resultan aplicables a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado.

Luego, explica la forma de operar de las disposiciones constitucionales que consagran la responsabilidad del Estado por los daños cometidos en cualquiera de sus actividades, las que priman por sobre toda otra disposición, reproduciendo a continuación jurisprudencia nacional que recepciona esta doctrina. Seguidamente, expresa que existen otras disposiciones que obligan a indemnizar los daños causados por sus órganos en el ejercicio de sus funciones en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de 1925, las Actas Constitucionales y la Constitución de 1980, su responsabilidad extracontractual también emana de la acción de indemnización contemplada en los artículos 4 y 44 de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado que consagran la



Foja: 1

responsabilidad del Estado por falta de Servicio, normas en la que se hace responsable al Estado por los daños que causen los órganos de la Administración, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.

Por otra parte reseña que existen fundamentos del Derecho Internacional que obligan al Estado a indemnizar, atendido a que los hechos generadores de la responsabilidad que se demandan, tienen además el carácter de violación a los derechos humanos, delito de lesa humanidad, crimen de guerra, u otra calificación concurrente con la de secuestro agravado o torturas, la responsabilidad del Estado debe determinarse asimismo de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran iuscogens y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Sostiene que en cuanto a la procedencia de la indemnización del daño moral, la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular, es necesario acudir al derecho común. Alude a la norma contenida en el artículo 2329 del Código Civil, que extiende la indemnización a todo daño, incluyéndose el daño moral, afirmando que la reparación de dicho daño moral está reconocida en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional, ya a estas alturas resulta indiscutible, citando al efecto, doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente concluye señalando que fluye de todo lo ya señalado que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile, de Carabineros de Chile, y de Gendarmería actuando en su calidad de tal, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por su mandante.

Conforme a lo expuesto, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del **FISCO DE CHILE**, representado, -en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizados, acogerla a tramitación, y, en definitiva, aceptarla en todas sus partes



Foja: 1

declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de **\$200.000.000.-** (doscientos millones de pesos), a don MISAEL SEGUNDO RAMÍREZ MIRANDA, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con expresa condena en costas.

Con fecha 17 de diciembre de 2021, consta la **notificación** de la demanda a don Juan Antonio Peribonio Poduje, en su calidad de presidente del Consejo de Defensa del Estado, como actual representante legal del demandado **FISCO DE CHILE**.

Con fecha 10 de enero de 2022, consta la **contestación** de parte del **FISCO DE CHILE**, representada por doña Ruth Israel López Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, quien luego de hacer un breve resumen de la demanda y las pretensiones allí consignadas, controvierte los hechos e interpone las excepciones y defensas, que a continuación se exponen.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, afirmando la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

En términos generales explica el demandado, que mediante la dictación de la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas), se han establecidos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, realizando principalmente tres tipos de compensaciones: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas (pensión anual establecida por la Ley N° 19.992 y Aporte Único de Reparación Ley N°20.874, por \$1.000.000 y gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda); y c) reparaciones simbólicas (establecimiento de Memoriales y Museos referentes a la Memoria y Derechos Humanos, entre otros).

Con lo dicho, afirma que estas reparaciones al igual que la pretensión manifestada en la demanda tienen como objetivo compensar los mismos



Foja: 1

daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños alegados por el demandante, no pudiendo, por ello, ser compensados nuevamente. En tal sentido sostiene que el fallo “Domic Bezic, Maja y otros, con Fisco”, rol Corte 4753-2001, ha sido especialmente claro cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”. Esto último fue ratificado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, donde se reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismo hechos resolviendo que: “DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se



Foja: 1

desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiese gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien -como se dijo- percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos”.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo código.

Esta excepción la fundamenta en que según los antecedentes de autos, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió, fueron ocurridos hasta el 18 de octubre del año 1974. Con ello, sostiene que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por imposibilidad de las propias víctimas o de sus familias de ejercer las acciones correspondientes, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 17 de diciembre de 2021, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que exige la Ley. En subsidio opone la excepción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil.

Explica en términos generales sobre la prescripción, que cuando no se ha establecido la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es



Foja: 1

prescriptible, por lo que no existiendo una norma específica sobre la materia ya que las normas de derecho internacional que consagran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, solo se referirían a la acción penal mas no a los efectos patrimoniales.

En subsidio de las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva de la acción deducida, solicita que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por parte del Estado conforme a las leyes de reparación y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que los cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, ya que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho.

Finalmente, hace presente la improcedencia del pago de reajustes e intereses por cuanto éstos mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, no hay obligación de indemnizar del Fisco; en consecuencia, no podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Con fecha 21 de enero de 2022, la parte demandante evacuó el trámite de la **réplica**, reiterando los fundamentos expuestos en su libelo de demanda solicitando el rechazo de cada una de las excepciones, defensas y alegaciones opuestas a la demanda por parte del Fisco de Chile en su escrito de contestación.

Con fecha 02 de febrero de 2022, consta el trámite de la **dúplica**, ratificando la parte demandada la totalidad de las argumentaciones expresadas en su escrito de contestación, en especial a las excepciones de reparación integral y prescripción.

Con fecha 17 de febrero de 2022, se dictó la **interlocutoria de prueba**, por el término legal, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 18 de noviembre de 2023, se citó a las partes a **oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, comparece don Boris Paredes Bustos, abogado, en representación de don **MISAELE SEGUNDO RAMÍREZ MIRANDA**, ambos ya individualizados, solicitando tener por interpuesta demanda de



Foja: 1

indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, todos ya individualizados, y en definitiva, aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de **\$200.000.000.-**, (doscientos millones de pesos), a don **MISAEL SEGUNDO RAMÍREZ MIRANDA**, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con expresa condena en costas.

Funda su pretensión en los argumentos ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, y que en esta parte, para evitar reiteraciones, se dan por reproducidos.

SEGUNDO.- Que, con fecha 10 de enero de 2022, el **FISCO DE CHILE**, contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido, fundándose para ello en los antecedentes de hecho y derecho que ya han sido reseñados en la parte expositiva de la sentencia, los cuales se dan por enteramente reproducidos en este motivo.

TERCERO.- Que, con fecha 21 de enero de 2022, se evacuó el trámite de la réplica, en la que se reiteraron los argumentos de la demanda y se efectuaron algunas precisiones en cuanto a las excepciones, alegaciones y defensas planteadas por la parte demandada.

CUARTO.- Que, con fecha 02 de febrero de 2022, se evacuó el trámite de la dúplica, en la que se reiteraron los argumentos de la contestación.

QUINTO.- Que, para acreditar los fundamentos de su pretensión, la parte demandante se valió de la siguiente prueba instrumental: En el folio 21: **1.-** Copia simple de Informe psicológico emitido por don Cristian Vilches Guerra, psicólogo clínico del Prais del Servicio de Salud Metropolitano Sur, de fecha 12 de julio de 2022, respecto del paciente don Misael Segundo Ramírez Miranda; En el folio 22: **2.-** Copia simple de artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental”, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos



Foja: 1

rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago; **3.-** Copia simple de artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad; **4.-** Copia simple de artículo sobre “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad; **5.-** Copia simple de artículo relacionado con “Salud Mental y violaciones de los Derechos Humanos”, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad, integrado por Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares, Aux. Enf. Janet Ulloa. Autor Responsable: Ps. Sergio Lucero Conus, Junio 1989; **6.-** Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1; **7.-** Copia de “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas” emitida por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, mencionando en página N°485 a don Misael Segundo Ramírez Miranda, con el Número 19.949; **8.-** Copia de carpeta de Misael Segundo Ramírez Miranda, emitida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

SEXTO.- Que, por su parte, el Fisco de Chile, en el folio 28, solicitó se oficie:

.- Al Instituto de Previsión Social a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido el demandante derivados de las leyes de reparación, especialmente en relación a las leyes 19.992, 20.874 y 20.134.

Petición a la cual accedió el Tribunal según resolución de fecha 07 de octubre de 2022, remitiéndose al Tribunal el siguiente antecedente:

.- Con fecha 17 de octubre de 2022, en el folio 29, se recibió oficio DGST ORD N°4792/9554, emitido por el Instituto de Previsión Social, de fecha 14 de octubre de 2022, por el cual se informa un detalle de los beneficios otorgados a don Misael Segundo Ramírez Miranda, por una suma total a la fecha de emisión de **\$57.099.915**, y una Pensión actual por la suma de \$291.238.-.



Foja: 1

SÉPTIMO.- Que, es un hecho no controvertidos entre las partes:

1.- Que el demandante don **MISAELE SEGUNDO RAMÍREZ MIRANDA**, fue víctima de una detención ilegal, apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas, cometidos por agentes del Estado entre el 03 de noviembre de 1973 hasta el 18 de octubre de 1974, figurando en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el número 19949, y por lo tanto, goza de los beneficios establecidos por la Ley N°19.992. Así mismo, consta que ha obtenido los beneficios de la Ley N°19.234 sobre exonerados políticos.

OCTAVO.- Que, en consecuencia, lo litigioso lo constituye la procedencia de la indemnización reclamada por el demandante, por concepto de daño moral.

NOVENO.- Que, previo a abordar el análisis del fondo de la controversia planteada en autos, se analizará separadamente cada una de las excepciones opuestas por el demandado.

DÉCIMO.- Que, sobre la excepción alegada por el Fisco de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante, fundándose en la documental aparejada por el Fisco de Chile, que da cuenta de las reparaciones de los perjuicios efectuadas por diversos instrumentos (Ley N°19.992.- y Ley N°19.123.-), como así también menciona diversas obras de carácter simbólico y los programas de reparación, al respecto, es un hecho evidente que el Estado de Chile cometió violaciones a los derechos humanos durante el período comprendido entre septiembre de 1973 a marzo de 1990, cuyas víctimas son beneficiarias de los mecanismos tendientes a su reparación establecidos en la Ley N°19.992.-, que estableció una pensión de reparación y otros beneficios a su favor, ampliada posteriormente por el aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, de la Ley N°20.874.-, de lo que se concluye que el Estado de Chile, demandado en autos, ha reconocido en forma voluntaria y tácita, mediante la dictación de dichos cuerpos legales, su obligación de reparar el mal causado a las víctimas de la violencia estatal y sus familiares expresados en tales leyes, cobrando, entonces, aplicación a su respecto la regla de *onus probandi* consagrada en el artículo 1698 del Código Civil, en el sentido que quien



Foja: 1

alega la extinción de una obligación, se encuentra en la necesidad de acreditar dicha circunstancia, y, siendo el pago alegado por el Fisco ya que, desde un punto de vista sustantivo, esta es la finalidad de la “reparación integral” cuya existencia sostiene- un modo de extinguir las obligaciones, consagrado como tal en el artículo 1567 N°1 del Código Civil, corresponde al Fisco probar la efectividad de encontrarse extinguida su obligación, sea a través del pago o de algún otro modo de extinguir las obligaciones, con el objeto de enervar la pretensión contraria.

Sin embargo, de las probanzas incorporadas legalmente al pleito, no se desprenden elementos de convicción que permitan establecer suficientemente la efectividad de haberse extinguido la obligación reparatoria en cuestión, en lo referido, particularmente, al demandante de este juicio.

A mayor abundamiento, la mentada Ley N° N°19.992.-, prescribió en su artículo 1°, lo siguiente: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N°1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.”*

Así también, se dispuso en el artículo 4° del mismo texto legal, que: *“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 2° de la presente ley, la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975.*

Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.”

Que, conforme el mensaje presidencial de dicha normativa (N°203-352), de fecha 10 de Diciembre de 2004, se desprende lo siguiente: *“Y en este sentido, comparto las tres líneas de reparación que presenta la Comisión. En primer lugar dice que tienen que haber medidas institucionales, las cuales tienen que cristalizar en la creación de un Instituto*



Foja: 1

Nacional de Derechos Humanos que promoverá, a través de la educación, el respeto a dichos derechos y a la vez se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la información acumulada en Chile, desde los archivos de la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión.

En segundo lugar, dice que tienen que haber medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas, como asimismo medidas jurídicas que prevengan a las actuales y futuras generaciones de esta terrible experiencia. Estas medidas, por cierto, y esto es muy importante, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas, pues ellas son instituciones permanentes de la República y pertenecen a todos los chilenos.

En tercer lugar, tienen que haber medidas de reparación individuales, que se expresan tanto en el ámbito jurídico como en el económico.

Las jurídicas, básicamente se refieren a cómo restablecemos la honra de estas personas. La mayor parte de las veces fueron acusadas de delitos que nunca cometieron, y por tanto, el restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos.

En el ámbito económico, lo he dicho antes, es imposible reparar daños físicos y espirituales que han marcado la vida de tantos compatriotas. Creo que sería una falta de respeto hacia las víctimas el que este valioso proceso de regeneración moral derivara en una pura discusión sobre dineros.

No obstante, considero que el Estado ya hizo un esfuerzo respecto de los familiares de los ejecutados y desaparecidos, respecto de quienes sufrieron el exilio, respecto de quienes fueron exonerados de sus trabajos por razones políticas. Debe entonces ahora el Estado entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido”.

DÉCIMO PRIMERO.- Que, en ese mismo sentido, cabe estar al decreto supremo N°1040, publicado en el Diario Oficial de 11 de noviembre de 2003, que creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, de cuyo informe se proponen, entre otras, una



Foja: 1

serie de medidas divididas en tres categorías: aquellas individuales, dirigidas a las víctimas, que intentan reparar el daño ocasionado; las colectivas, de carácter simbólico, que tienen un mayor efecto sobre la percepción actual y futura de lo sucedido y del juicio social, que buscan garantizar que no se vuelvan a producir hechos de la gravedad que se han documentado; y aquellas referidas a la institucionalidad, para asegurar la puesta en práctica de las medidas, así como la vigencia de los derechos humanos en la convivencia futura de la nación.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, por su parte, la Ley N°20.874.-, en su artículo 1º, estableció que el aporte único entregado por esta normativa tiene el carácter de una reparación “parcial”.

DÉCIMO TERCERO.- Que, por lo demás, en dicho orden de ideas, uno de los requisitos del pago (que es la finalidad a la cual se dirige sustancialmente la “reparación integral” alegada por el demandado), como modo de extinguir obligaciones, consiste en la integridad del mismo, exigencia que, en concepto de este Tribunal, no se cumple en la especie, en atención a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una indemnización justa a la parte lesionada, es decir, a cada persona en especial, y, en comparación, a los mecanismos e instrumentos legales de reparación invocados por el demandado no se ajustan a la norma internacional referida, la cual, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2º del artículo 5 de la Constitución Política de nuestra República, debe ser cumplida por el Estado de Chile, so pena de comprometer su responsabilidad internacional.

A mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema ha declarado, en un pleito análogo, que “la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que sólo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se



Foja: 1

trata de modalidades diferentes de compensación, lo que hace que el hecho que las asuma el Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley” (Considerando 13° de la sentencia dictada por el Máximo Tribunal el 29 de marzo de 2016, en el Rol N°2289-2015).

DÉCIMO CUARTO.- Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado en el apartado precedente, corresponderá desestimar la excepción de reparación integral, opuesta por la parte demandada.

DÉCIMO QUINTO.- Que, por otra parte, el Fisco alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las normas civilistas internas.



De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por el demandado en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que "... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraria la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del



Foja: 1

sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo ROL ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción principal y subsidiaria enarbolada por el demandado.

DÉCIMO SEXTO.- Que, descartadas las alegaciones previas del demandado, en relación a las pretensiones del actor, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Que, los hechos sufridos por el demandante conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención ilegal, apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas, cometidos por agentes del Estado entre el 03 de noviembre de 1973 hasta el 18 de octubre de 1974, lo que fluye de los acontecimientos descritos y de la intervención de sus agentes en los referidos hechos, considerando en particular lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas que contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al



Foja: 1

ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario, debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como del Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el derecho el Derecho Internacional Humanitario.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que, establecida la responsabilidad del Estado en los hechos sufridos por el demandante, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor.

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.



Foja: 1

El daño moral consiste en la lesión a los intereses “extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88).

DÉCIMO OCTAVO.- Que, siendo un hecho de la causa que el actor don MISAEL SEGUNDO RAMÍREZ MIRANDA tiene la calidad de víctima de prisión política y torturas, forzoso resulta concluir que en virtud de principios internacionales en materia de marras, los derechos que le fueran conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile. Esto último aparece ratificado en el instrumento individualizado en el número siete del considerando quinto de esta sentencia, en cuyo texto reza que: *“La Comisión ha reconocido la condición de víctima de prisión por razones políticas y de tortura a través de un proceso colegiado de evaluación de los antecedentes de cada caso en particular, dirigido a la identificación de elementos de juicio objetivos, que permitieran formarse convicción moral sobre dicha condición”*.

DÉCIMO NOVENO.- Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral específico del demandante y cuya indemnización solicita, el actor acompañó los instrumentos individualizados en el considerando quinto de esta sentencia, particularmente, Informe Psicológico de don Misael Segundo Ramírez Miranda, suscrito por el Psicólogo Clínico don Cristian Mauricio Vilches Guerra, del Servicio de Salud Metropolitano Sur PRAIS, el que carente de objeción, concluye que el relato expuesto por el Sr. Ramírez Miranda es concordante con las secuelas esperables en víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, afectando directamente su salud, expresada por ejemplo, en el daño por la interrupción y alteración de la vida social y laboral, al momento que se ve impedido continuar de manera normal su trabajo, siendo despedido. Agrega que en conjunto con su grupo familiar al estar expuestos a la vivencia de diversas experiencias traumáticas de tipo represivas, conforma una evidente politraumatización, que repercute en sus dinámicas interpersonales viéndose



Foja: 1

afectada su salud física y estabilidad emocional durante un extenso periodo de tiempo, experimentando la vivencia del daño en el ámbito privado, viviéndolo en aislamiento, asociándolo a sentimientos de culpa. Añade que los allanamientos, detenciones políticas y episodios de tortura de los cuales fue víctima el entrevistado generaron un daño irreparable y un quiebre definitivo en su proyecto vital.

Que, de este modo, el daño sufrido por el actor se encuentra justificado, y más aún, al identificar el psicólogo en él un Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT) de curso crónico, agravado por la tortura. Además, en el referido informe, plantea también la concurrencia de sintomatología coincidente con un trastorno del ánimo de tipo depresivo recurrente a lo largo de los años en el demandante. El profesional indica que a lo anterior, se suman efectos biopsicosociales asociados a las experiencias traumáticas, y consecuencias psicosociales, que se prologan en el tiempo y amplían la magnitud del daño.

VIGÉSIMO.- Que, en la determinación del *quantum* de la indemnización, cabe señalar que en la especie se configura el daño moral del demandante, el que ha sido debidamente acreditado. Ahora bien, y conforme lo establecido precedentemente, el Tribunal lo calculará y cuantificará, prudencialmente, atendido el mérito de los antecedentes que obran en el proceso, conforme a criterios de justicia y equidad, y teniendo especialmente presente la suma que se le ha pagado al actor por concepto de pensión de reparación dispuesta en la Ley N°19.992.- para víctimas de Derechos Humanos y Violencia Política, aporte único de la Ley N°20.874.-, y en particular, los beneficios otorgados por concepto de la Ley N°19.234 sobre exonerados políticos.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, por todo lo razonado, se fijará a título de indemnización de perjuicios por daño moral, estimando que el Estado deberá pagar la suma de **\$50.000.000.-** (cincuenta millones de pesos) a favor del actor **MISAEI SEGUNDO RAMÍREZ MIRANDA.**



Foja: 1

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer el demandado, las sumas reguladas se reajustarán conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, desde la fecha en que esta sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, hasta la época de su pago efectivo.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencido y estimando este magistrado que el demandado ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que, el resto de la prueba rendida en nada altera, modifica o cambia lo resuelto en esta sentencia.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332, 2497, 2514 y 2515 del Código Civil del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 262 y siguientes, 309 y siguientes, 318 y siguientes, 327 y siguientes, 341 y siguientes, 432, 433, y 748 y siguientes del Código Civil; artículo 4 de la Ley N° 18.575, Ley N°19.992, Ley N° 20.874, Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, SE RESUELVE:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y de prescripción deducidas por el **FISCO DE CHILE**;

II.- Que se desestiman las restantes alegaciones de la parte demandada, opuestas en la contestación;



Foja: 1

III.- Que se acoge parcialmente la demanda y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante don **MISAEI SEGUNDO RAMÍREZ MIRANDA**, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de **\$50.000.000.-** (cincuenta millones de pesos), más los reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo segundo precedente;

IV.- Que se exime del pago de las costas al demandado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Consúltese si no se apelaré.

Rol N° C-9288-2021. (Carpeta electrónica. Ley 20.886).

Pronunciada por don **ROBERTO EMILIO SOTO BUSTAMANTE**, JUEZ INTERINO. Anotada en el Registro Computacional de Causas Contenciosas para fallo del Tribunal.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, cinco de Julio de dos mil veintitrés.**

